

**EL DERECHO COLECTIVO AL USO DE ESPACIO PÚBLICO FRENTE A LA
ACTIVIDAD DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍA EN VÍA PÚBLICA EN
LA CIUDAD DE CALI**

**PRESENTADO POR:
JOHN ANDERSON LOPEZ TABORDA
ELKIN RODRIGUEZ PIMIENTA**

**UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESPECIALIZACIÓN EN MOVILIDAD Y TRANSPORTE
2017**

**EL DERECHO COLECTIVO AL USO DE ESPACIO PÚBLICO FRENTE A LA
ACTIVIDAD DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍA EN VÍA PÚBLICA EN
LA CIUDAD DE CALI**

**PRESENTADO POR:
JOHN ANDERSON LOPEZ TABORDA
ELKIN RODRIGUEZ PIMIENTA**

**PROFESOR ASESOR
ING. ADAN SILVESTRE GUTIÉRREZ**

**UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESPECIALIZACIÓN EN MOVILIDAD
2017**

CONTENIDO

1. RESUMEN	5
2. INTRODUCCIÓN	6
3. OBJETIVOS	8
4. ASPECTOS PRELIMINARES	9
4.1 MARCO TEÓRICO	9
4.2 MARCO CONCEPTUAL	15
5. DISEÑO METODOLÓGICO	16
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN	16
5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN	16
Recolección de la Información.....	16
6. EL DERECHO COLECTIVO AL GOCE DEL ESPACIO PÚBLICO	17
6.1 ÁMBITO LEGAL.....	17
6.2 PROTECCIÓN AL ESPACIO PÚBLICO COMO DERECHO COLECTIVO	18
7. REGULACIÓN DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍA EN VÍA PÚBLICA, DENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	22
7.1. PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA	27
La libertad económica es núcleo esencial del Estado Social de Derecho, mediante aquella se protegen bienes jurídicos tutelados como la libre iniciativa privada, la propiedad y la libre escogencia de ocupación y oficio, todos dentro de los límites del bien común.	27
La Corte Constitucional, con base en el artículo 333 de la Constitución, reconoce dos tipos de libertades: la libertad de empresa y la libre competencia, las cuales desarrolla de la siguiente forma:	27
“La libertad de empresa es la facultad de las personas de “(...) afectar o destinar bienes de cualquier tipo (principalmente de capital) para la realización de actividades económicas para la producción e intercambio de bienes y servicios conforme a las pautas o modelos de organización típicas del mundo económico contemporáneo con vistas a la obtención de un beneficio o ganancia”. Esta libertad comprende, entre otras garantías, (i) la libertad contractual, es decir, la capacidad de celebrar los acuerdos que sean necesarios para el desarrollo de la actividad económica, y (ii) la libre iniciativa	

privada. La libre competencia, por su parte, consiste en la facultad que tienen todos los empresarios de orientar sus esfuerzos, factores empresariales y de producción a la conquista de un mercado, en un marco de igualdad de condiciones. Según la jurisprudencia constitucional, esta libertad comprende al menos tres prerrogativas: (i) la posibilidad de concurrir al mercado, (ii) la libertad de ofrecer las condiciones y ventajas comerciales que se estimen oportunas, y (iii) la posibilidad de contratar con cualquier consumidor o usuario. En este orden de ideas, esta libertad también es una garantía para los consumidores, quienes en virtud de ella pueden contratar con quien ofrezca las mejores condiciones dentro del marco de la ley y se benefician de las ventajas de la pluralidad de oferentes en términos de precio y calidad de los bienes y servicios, entre otros. Para garantizar la libre competencia, el Estado es entonces responsable de eliminar las barreras de acceso al mercado y censurar las prácticas restrictivas de la competencia, como el abuso de la posición dominante o la creación de monopolios.”27

9. CONCLUSIONES.....	38
10. BIBLIOGRAFIA	39

1. RESUMEN

El derecho al goce del espacio público se encuentra consagrado en la Ley 472 de 1998, además de ello, cuenta con base constitucional y ha sido desarrollado en reiterada jurisprudencia de las altas cortes, en donde se señala que su protección se encuentra vinculada de forma directa al goce de derechos ciudadanos como la vida digna. Por otra parte, La carga y descarga de mercancías es una actividad lícita, permitida por el legislador y regulada por cada autoridad administrativa municipal o distrital. Coexiste con el derecho colectivo al espacio público, pues es necesaria para hacer efectivos otros derechos del mismo rango constitucional, como la libertad económica y los derechos de los consumidores, los cuales a su vez constituyen la columna del sistema económico libre del Estado Social de Derecho; en virtud de lo anterior, debe aplicarse una ponderación entre el derecho colectivo al goce del espacio público, partiendo de la base de que aquel no es absoluto, sino que es flexible frente a otros intereses del mismo rango constitucional.

Palabras Clave: Acción popular, carga, colectivo, derecho, descarga, estacionar.

ABSTRACT

The right to enjoy public space is enshrined in Law 472 of 1998, in addition, it has a constitutional basis and has been developed in the jurisprudence of the high courts, where it is pointed out that its protection is directly linked to the enjoyment of citizens' rights as a dignified life. On the other hand, the loading and unloading of merchandise is a lawful activity, allowed by the legislator and regulated by each municipal or district administrative authority. It coexists with the collective right to the public space, since it is necessary to give effect to other rights of the same constitutional rank, as economic freedom and the rights of the consumers, which in turn constitute the column of the free economic system of the Social State of Right; by virtue of the above, a weighting between the collective right to the enjoyment of public space should be applied, based on the fact that it is not absolute, but is flexible in relation to other interests of the same constitutional rank.

Keywords: Popular action, cargo, collective, right, unload, park.

2. INTRODUCCIÓN

La presente investigación busca realizar un análisis ponderado sobre dos figuras jurídicas de gran relevancia, la primera se refiere al derecho colectivo al goce del espacio público, lo que ha llevado prohibiciones en derecho de tránsito como la de estacionamiento en zonas prohibidas; frente a la actividad de cargue y descargue de mercancías, no prohibida por las normas de tránsito pero sí regulada, y que además es necesaria para el ejercicio de actividades económicas lícitas que favorecen principios constitucionales como la libertad económica y la libre iniciativa privada.

Al respecto, se hace un análisis de los alcances del derecho colectivo al goce del espacio público y sus límites, usando para ello fuentes normativas de carácter legal y constitucional, así como sentencias del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, en donde se haya dado desarrollo a éste derecho colectivo como consecuencia de acciones populares.

De igual forma, se analiza el marco normativo que regula en la ciudad de Cali la actividad de cargue y descargue de mercancías en la vía pública, realizando un compendio de normas constitucionales, legales como el Código Nacional de Tránsito y los actos administrativos expedidos por el municipio de Santiago de Cali. Luego de lo anterior, se proyecta realizar el ejercicio de ponderación, haciendo uso de normas de interpretación como la hermenéutica jurídica y los test de proporcionalidad, para encontrar la coexistencia de las figuras jurídicas planteadas en el inicio.

Éste trabajo investigativo cuenta con bases académicas referidas en el estado del arte, en donde se genera una visión de carácter constitucional al problema de investigación, pero sin olvidar el contenido normativo de las normas de tránsito

que se colocan bajo análisis. En el mismo sentido, el proyecto cuenta con una sólida base teórica que sustenta tanto el derecho colectivo como la necesidad de realizar actividades en vías públicas sin que ello amerite sanción.

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo realizar un análisis jurídico, desde la doctrina, la dogmática jurídica y la jurisprudencia, respecto de dos figuras jurídicas que son de importancia social, la primera es el derecho colectivo al goce del espacio público y la segunda es la actividad de carga y descarga de mercancías en vía pública, la cual es indispensable para desarrollar hacer efectivos derechos como la libre iniciativa económica y la libre empresa.

El trabajo plantea un importante debate académico, teórico y doctrinal que puede llevarse a plenitud a la práctica jurídica, pues busca hallar, una interpretación válida que pondere dichas figuras, evitando desbordamiento de facultades del juez al resolver acciones populares o de las autoridades administrativas al imponer sanciones. Así, se encuentran planteamientos del derecho constitucional que serán enriquecidos, así como aportes del derecho administrativo y el derecho de tránsito y transporte.

La investigación plantea un análisis jurídico dentro de la ciudad de Cali, lo que es de gran interés para autoridades locales al momento de aplicar un orden en el uso de vías públicas. Por otra parte, con el actual crecimiento económico de la ciudad, lo que trae consigo la apertura de nuevos establecimientos de comercio e incremento de la población que requiere abastecer sus necesidades básicas, se tiene que el tema planteado es actual y necesario.

3. OBJETIVOS

Realizar un análisis jurídico, desde la doctrina, la dogmática jurídica y la jurisprudencia, del derecho colectivo al goce del espacio público y la actividad de carga y descarga de mercancías en vía pública.

4. ASPECTOS PRELIMINARES

4.1 MARCO TEÓRICO

La primera teoría que se considera pertinente citar como sustento del proyecto de investigación es la Teoría de la Dignidad del filósofo Emmanuel Kant, pues teniendo en cuenta que el tema propuesto hace referencia a la protección de un derecho colectivo como garantía de los ciudadanos que merecen un estilo de vida digno, se considera que la protección de sus derechos fundamentales se justifica en la necesidad de procurar hacer efectivo el valor de la dignidad en los sujetos intervinientes en la actuación, así como de la moral administrativa en el actuar de los funcionarios.

En consecuencia, la autonomía moral es el concepto central con el cual Kant caracteriza al ser humano y constituye el fundamento de la dignidad humana:

"La autonomía, es, pues, el fundamento de la dignidad de la naturaleza humana y de toda naturaleza racional". Esta caracterización moral marca una diferencia entre los animales y los seres humanos, y, a la vez, deja abierto un espacio para el respeto a otros seres que pudieran ser moralmente imputables."

En este sentido, se indica que Kant distingue claramente entre valor y dignidad. Concibe la dignidad como un valor intrínseco de la persona moral, la cual no admite equivalentes. La dignidad no debe ser confundida con ninguna cosa, con ninguna mercancía, dado que no se trata de nada útil ni intercambiable o provechoso. Lo que puede ser reemplazado y sustituido no posee dignidad, sino precio. Cuando a una persona se le pone precio se la trata como a una mercancía. Para él, persona es el sujeto cuyas acciones son imputables, una cosa es algo que no es susceptible de imputación. De ahí que la ética, según Kant, llegue sólo hasta los límites de los deberes recíprocos de los hombres.

En cuanto ser dotado de razón y voluntad libre, el ser humano es un fin en sí mismo, que, a su vez, puede proponerse fines. Es un ser capaz de hacerse preguntas morales, de discernir entre lo justo y lo injusto, de distinguir entre acciones morales e inmorales, y de obrar según principios morales, es decir, de obrar de forma responsable. Los seres moralmente imputables son fines en sí mismos, esto es, son seres autónomos y merecen un respeto incondicionado. El valor de la persona no remite al mercado ni a apreciaciones meramente subjetivas (de conveniencia, de utilidad, etc.), sino que proviene de la dignidad que le es inherente a los seres racionales libres y autónomos.

La segunda teoría sobre la cual se basa el presente proyecto corresponde al ius positivismo, desde la concepción misma del derecho que debe establecer de forma expresa las formalidades propias de cada actuación para garantizar el debido proceso. La tesis central del positivismo es que el derecho es un fenómeno social que puede ser identificado y descripto por un observador externo sin recurrir a consideraciones acerca de su justificación o valor moral o acerca del deber moral de obedecerlo y aplicarlo. En otras palabras, y para repetir un viejo slogan que el derecho que es puede y debe ser cuidadosamente distinguido del derecho que debe ser.

La investigación propuesta también encuentra sus fundamentos teóricos en la denominada teoría constitucional que se define como el:

“Conjunto de principios, normas y técnicas político-jurídicas que, con sujeción al constitucionalismo, determinan con validez universal el concepto, características, contenido y finalidad de la Constitución de cualquier Estado Nación.

Es claro, por ende, que la Teoría Constitucional no versa sobre el análisis y evaluación de la Ley Suprema de un Estado concreto, pues

su tema es de sentido y alcance general. Claro resulta, asimismo, que dicha Teoría se funda y desarrolla dentro de los parámetros del constitucionalismo, es decir, de un movimiento que propugna la promoción y defensa de la dignidad y derechos esenciales de la persona humana, sobre la base del gobierno o Poder limitado por aquel objetivo capital. En fin, es claro también que la Teoría que nos ocupa se construye deductiva e inductivamente, ambas vías simultáneamente y no una sola, porque en ella encontramos principios normativos o de recta conducta que se nos presentan con el rasgo de validez universal, a la par que hallamos otros principios resultantes de la experiencia histórica, del aspecto empírico que tienen los procesos político-jurídicos.”

El positivismo jurídico, desarrollado por planteamientos como los de Hans Kelsen en su Teoría Pura del Derecho, sustenta el presente proyecto de investigación por cuanto se basa en el análisis de la norma jurídica en sentido estricto, aplicando la hermenéutica jurídica y el método exegético. Así, se expone el positivismo de la siguiente forma:

“Para averiguar los distintos significados de la expresión "positivismo jurídico" o bien, para establecer cuáles son las doctrinas centrales del positivismo jurídico, o sea, las que han recibido mayor adhesión de parte de los autores calificados normalmente de positivistas, nada mejor, posiblemente, que recurrir a la obra de autores como Hans Kelsen, Alf Ross, Norberto Bobbio y Herbert Hart, quienes son considerados comúnmente, en algún sentido, o en más de algún sentido, "positivistas". Examinaremos también el pensamiento de Ronald Dworkin sobre el particular, aunque no. desde luego, como otro autor a quien pueda considerarse propiamente "positivista".

En esta investigación, también concurren multiplicidad de teorías y escuelas que explican las bases del sistema económico constitucional del Estado colombiano, pues debe tenerse en cuenta que la actividad relativa al cargue y descargue de mercancías se vislumbrará como necesaria para la ejecución de principios como la libertad económica y el grado de intervención del Estado en dicha actividad. La relación del Estado y la economía, la relación del derecho y la economía y los fines del Estado y los modelos económicos, ello, pues es pertinente en principio resaltar la base y los antecedentes teóricos de los modelos económicos que permiten al Estado intervenir activamente en la economía y en el mercado. Entre ellas, están: a) clásica, b) la escuela neoclásica, d) la teoría Keynesiana y e) la teoría estructuralista.

“La escuela clásica desarrolla su propia teoría del valor, la cual argumenta que el valor de todas las mercancías está dado por la cantidad trabajo empleado en la producción de los mismas, “teoría valor trabajo”. A través de esta teoría se pretende explicar la dinámica de los precios en una economía, en la cual los precios de mercado a largo plazo tienden a los precios naturales por el proceso de atracción gravitatoria del mercado o en términos de Smith debido a la mano invisible. Esta teoría busca además el establecimiento de ganancia, salario y renta natural como fundamento de los precios naturales de las mercancías”

En la teoría liberal de la economía de mercado el consumidor es el gran privilegiado por el sistema económico: la libre competencia entre las empresas debería desembocar en la multiplicación de los bienes ofrecidos en el mercado, el aumento en su calidad y la disminución en su precio; así, el consumidor podría elegir entre más bienes dispuestos en el mercado, de mejor calidad y a menor precio. De ahí que no se considera preciso inicialmente protegerle más allá de ciertas reglas muy concretas, destinadas a reprimir algunas prácticas ilícitas,

conocidas desde antiguo. Sin embargo, la realidad ha demostrado seguir otro camino: la expansión industrial coincide con un aumento muy importante de la fuerza de las empresas, que imponen a sus clientes las condiciones previamente fijadas en forma unilateral por ellas; con la sofisticación de los productos, con el desarrollo del crédito y con la influencia cada vez más poderosa de la publicidad.

“Los economistas neoclásicos surgieron en la segunda mitad del siglo XIX y se les llama también teóricos de la “utilidad marginal”. Derivaron sus concepciones teóricas del enunciado de utilidad expresado por los clásicos, llegando a elaborar una teoría subjetiva del valor que es la base de dicha corriente”

El abuso de la libertad económica sin regulación estatal genera una brecha más amplia entre los sectores dirigentes y los menos favorecidos o débiles en el devenir económico, tales como los consumidores. Debido a ello, se planteó el intervencionismo de Estado mediante teorías como la Keynesiana que indica:

“Para la teoría keynesiana, el empleo total depende de la demanda total y el paro es el resultado de una falta de demanda total. La demanda efectiva se manifiesta en el gasto de la renta, si aumenta la renta de una comunidad también aumentará su consumo, pero éste menos que aquella. Por lo tanto, para que haya una demanda suficiente para mantener el nivel de empleo, se debe verificar un nivel de inversión equivalente a la diferencia entre la renta y el consumo.

Por ello podemos decir que la inflexibilidad de salarios no es el único factor que desencadena el desempleo, aun cuando exista competencia perfecta en los mercados y todos los precios milagrosamente se ajustaran instantáneamente, las decisiones de los inversores influirán sobre la demanda efectiva y por último en el nivel de empleo.

Por otro lado, no sólo el desempleo, también la inflación depende del volumen de demanda efectiva; cuando la demanda es deficiente se produce el desempleo y cuando la demanda es excesiva se produce la inflación. Keynes acepta la conclusión tradicional de que los aumentos de la cantidad de dinero llevarán a aumentos en el nivel de precios, pero difiere en el proceso causal. El impacto inicial del aumento en la cantidad de dinero disminuye los tipos de interés, lo que aumenta la demanda efectiva por inversión, asociada a un aumento de la renta, del empleo y de la producción. Es a causa del incremento en el costo de la mano de obra que los precios también comienzan a subir.

El interés como premio por no atesorar dinero: En la teoría keynesiana, el dinero desempeña las funciones de ser unidad de cambio, medida de cuenta y reserva de valor. Considerando esta última función, los que poseen más renta de la que consumen tienen como alternativas atesorar dinero, prestarlo a una determinada tasa de interés o invertir en una actividad que brinde cierto beneficio. Si las personas deciden acumular riqueza en forma estéril, debe haber un por qué al tomar esta decisión. Para Keynes cada individuo posee una preferencia por la liquidez que combinada con la cantidad de dinero determina la tasa real de interés en un momento dado.”

El intervencionismo de Estado orientó modelos constitucionales como el colombiano, con figuras de organización social, política y económica, tales como el Estado Social de Derecho, en el cual, si bien se respeta la libre empresa y la iniciativa privada, el Estado intervine en la economía para procurar el acceso de los bienes y servicios mínimos para la efectividad del valor de la dignidad humana en los sectores menos favorecidos. Por otra parte, también surgieron teorías que tendían a dar explicación a los sistemas económicos de América Latina por

considerarse países en vía de desarrollo y pleno fortalecimiento en el mercado internacional.

4.2 MARCO CONCEPTUAL

Comparendo: Orden formal de notificación para que el presunto contraventor o implicado se presente ante la autoridad de tránsito por la comisión de una infracción.

Derecho Colectivo: Derechos que corresponden al conglomerado social y son protegidos a través de la acción popular.

Infracción: Transgresión o violación de una norma de tránsito. Habrá dos tipos de infracciones simple y compleja. Será simple cuando se trate de violación a la mera norma. Será compleja si se produce un daño material.

Inmovilización: Suspensión temporal de la circulación de un vehículo.

Organismos de tránsito: Son unidades administrativas municipales distritales o departamentales que tienen por reglamento la función de organizar y dirigir lo relacionado con el tránsito y transporte en su respectiva jurisdicción.

5. DISEÑO METODOLÓGICO

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

Es una investigación básica, con aplicación del paradigma cualitativo, enmarcada en un nivel de profundidad descriptivo, pues se pretende analizar, interpretar y comprender desde el punto de vista normativo, teórico y académico, dos figuras jurídicas que parecen contrapuestas pero que deben armonizarse.

5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

El método a aplicar en el desarrollo de esta investigación es cualitativo, pues la variable planteada se refiere al análisis de instituciones jurídicas desarrolladas en la Constitución Política, la Ley, jurisprudencia y actos administrativos.

Recolección de la Información

Se sigue el siguiente proceso de recolección de la información:

Población y muestra:

Se analizan 5 pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, y se analizan las normas de carácter legal y administrativo.

Fuentes de Información:

Primaria por ser sentencias judiciales y normas de carácter legal, constitucional y administrativo.

Técnica e instrumento de recolección de la información:

Tomadas del sitio web oficial de las altas Cortes y de las páginas del Senado de la República y de la Alcaldía Municipal de Cali.

6. EL DERECHO COLECTIVO AL GOCE DEL ESPACIO PÚBLICO

6.1 ÁMBITO LEGAL

El goce del espacio público es un derecho colectivo contenido en el literal “d” del artículo 4 de la Ley 472 de 1998. Consiste en lo siguiente: “*El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público.*”

Al ser un derecho colectivo, es procedente la protección constitucional a través de la acción popular que contempla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia, desarrollado por la antes citada Ley.

El Artículo 88 de la Constitución Política, dispone que:

"La Ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.

"También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones populares.

"Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos".

En desarrollo de este precepto constitucional se expidió la Ley 472 del 25 de agosto de 1998 y en el artículo 2º define las acciones populares como "*los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos*".

En el inciso segundo del Artículo 2º dice que "las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible".

Por otra parte, la Ley 9ª de 1989, sobre reforma urbana, dice que debe entenderse por espacio público:

"el conjunto de inmuebles públicos o elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza y por su uso o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes".

Se decanta de ésta forma el concepto de espacio público como derecho contemplado en el ordenamiento jurídico colombiano.

6.2 PROTECCIÓN AL ESPACIO PÚBLICO COMO DERECHO COLECTIVO

El artículo 82 de la Constitución Política, dispone que corresponde al Estado velar por la "*integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular*". La primera entidad llamada a la protección del espacio público es el municipio; así lo dispuso el artículo 315 de la Carta, al indicar que los alcaldes, en su calidad de primera autoridad de policía en el área de su competencia, son quienes deben cumplir y hacer cumplir las normas constitucionales y legales y las que expida el Concejo Municipal correspondiente.

Además, en el caso de Bogotá, por disposición del ordinal 16 del artículo 38 del Decreto 1421 de 1993, son atribuciones del Alcalde Mayor del D.C. velar porque se respete el espacio público y su destinación o uso común.

Así, puede indicarse sin lugar a dudas corresponde a los alcaldes velar porque se respeten las normas relativas a la protección y goce del espacio público.

Por otra parte, la protección al Espacio Público como derecho colectivo, una vez encontrada una vulneración o puesta en peligro, es susceptible de ser protegido por la autoridad judicial a través de la acción popular. En ese sentido, ha tenido oportunidad de pronunciarse la Corte Constitucional para definir los alcances de éste derecho, concibiéndolo así:

“El espacio público y los bienes que lo conforman, por su incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos, cuentan con una especial protección dentro de nuestro ordenamiento jurídico haciéndolos “inalienables, imprescriptibles e inembargables” y consagrando un deber en cabeza del Estado, de rango constitucional, de preservar su integridad y su destinación al uso y goce de la colectividad. Así entonces, el fundamento de la protección del espacio público nace en nuestra Carta Política y se disemina a través del ordenamiento jurídico por medio de una regulación tanto a nivel nacional como local, creando varias herramientas jurídicas con las cuales cuenta la administración para lograr tal fin. Sin embargo, pese el reconocimiento de su prevalencia sobre el interés particular, la protección del espacio público como imperativo constitucional encuentra limitada su forma de ejecución por los derechos fundamentales, y cualquier limitación a estos, por una actuación de la administración, debe ceñirse a los postulados del principio de

proporcionalidad puesto que de lo contrario se desnaturalizaría nuestro Estado Social de Derecho.”¹

Salta a la vista la relevancia del derecho en mención para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado Social de Derecho. En virtud de ello, la ciudadanía también es otro actor llamado a su protección a través de los mecanismos que le otorga el ordenamiento jurídico.

6.3 CALLES, PARQUES Y ZONAS URBANAS COMO ESPACIO PÚBLICO

Las calles y vías públicas hacen parte de los elementos constitutivos artificiales o contruidos del espacio público; se definen como aquellos diseñados y desarrollados por el hombre, para facilitar actividades propias de las ciudades como las áreas integrantes de los sistemas de circulación peatonal y vehicular; las áreas articuladoras del espacio público y de encuentro, tales como: parques urbanos, zonas de cesión gratuita al municipio o distrito, plazas, plazoletas, escenarios deportivos; escenarios culturales y de espectáculos al aire libre; las áreas para la conservación y preservación de las obras de interés público y los elementos urbanísticos, arquitectónicos, históricos, culturales, recreativos, artísticos y arqueológicos como monumentos nacionales, murales, esculturas, fuentes ornamentales los que incluyen el patrimonio de conservación cultural y arquitectónica, que contribuyen a preservar la historia y memoria colectiva de las ciudades. Una manera de clasificar los componentes contruidos del espacio público, distingue las siguientes categorías:

Elementos Para circulación peatonal Estas áreas, como los andes, las alamedas y artificiales o las vías peatonales, son destinadas contruidos exclusivamente al tránsito de los peatones.

¹Corte Constitucional. Sentencia T-578A/11.

- Para circulación vehicular: Son las áreas destinadas para la circulación de vehículos, tales como las calzadas, zonas viales y pasos a desnivel.
- Para encuentro y Son los espacios destinados al encuentro y articulación urbana convivencia de los ciudadanos. Dentro de esta categoría se encuentran, por ejemplo, las plazas, plazoletas y parques.
- Conservación cultural: En esta categoría se encuentran los Bienes arquitectónica de Interés Cultural y arquitectónico, que constituyen parte del patrimonio de la ciudad.

La importancia de los elementos construidos radica en que contribuyen a moldear la ciudad y a determinar la forma en que se desarrolla y se relacionan sus habitantes. «Los seres humanos se comportan de acuerdo con el entorno en el que viven. Por lo tanto, un ambiente que los respeta, genera en ellos un compromiso con su entorno y con las demás personas. De igual manera, un ambiente que agrede permanentemente al hombre genera, a cambio, la misma reacción. La arquitectura tiene un poder definitivo en la actitud de los ciudadanos.²

De conformidad con lo anterior, es evidente que las calles y caminos son elementos del espacio público, razón por la cual su mal uso o descuido, generan una clara afectación a dicho derecho.

² Alcaldía mayor de Bogotá 1998 basado en el Decreto Nacional 1504 de 1998.

7. REGULACIÓN DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍA EN VÍA PÚBLICA, DENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

Entre las conductas que pueden atentar contra el goce del espacio público se encuentran la ocupación permanente o parcial de vías públicas, reflejándose en actividades como cerramiento de parques, estacionamiento en zonas prohibidas o el uso de las vías para la carga y descarga de mercancías, conductas frente las cuales la autoridad administrativa, sea municipal o distrital, es la primera llamada a actuar, y en última medida la autoridad judicial. No obstante lo anterior, se ha encontrado que el goce del espacio público no es un derecho absoluto y en ocasiones es flexible frente a otros intereses de similar jerarquía jurídica, razón por la cual, pueden plantearse excepciones a las sanciones que se pueden imponer por ocupación de espacio público como vías.

La carga y descarga de mercancías es una actividad lícita, permitida por el legislador y regulada por cada autoridad administrativa municipal o distrital. Coexiste con el derecho colectivo al espacio público, pues es necesaria para hacer efectivos otros derechos del mismo rango constitucional, como la libertad económica y los derechos de los consumidores, los cuales a su vez constituyen la columna del sistema económico libre del Estado Social de Derecho.

La permisibilidad de ésta conducta se puede encontrar en el análisis normativo de la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito, y la Ley 1383 de 2010, mediante la cual se modifica la anterior.

Se observa que el artículo 15 de la Ley 1383 de 2010, que modifica el artículo 76 de la Ley 769 de 2002, contiene la norma especial sobre prohibición de parqueo así:

“ARTÍCULO 15. El artículo 76 de la Ley 769 de 2002, quedará así:

Artículo 76. Lugares prohibidos para estacionar. Está prohibido estacionar vehículos en los siguientes lugares:

Sobre andenes, zonas verdes o sobre espacio público destinado para peatones, recreación o conservación.

En vías arterias, autopistas, zonas de seguridad, o dentro de un cruce.

En vías principales y colectoras en las cuales expresamente se indique la prohibición o la restricción en relación con horarios o tipos de vehículos.

En puentes, viaductos, túneles, pasos bajos, estructuras elevadas o en cualquiera de los accesos a estos.

En zonas expresamente destinadas para estacionamiento o parada de cierto tipo de vehículos, incluyendo las paradas de vehículos de servicio público, o para limitados físicos.

En carriles dedicados a transporte masivo sin autorización.

A una distancia mayor de treinta (30) centímetros de la acera.

En doble fila de vehículos estacionados, o frente a hidrantes y entradas de garajes.

En curvas.

Donde interfiera con la salida de vehículos estacionados.

Donde las autoridades de tránsito lo prohíban.

En zona de seguridad y de protección de la vía férrea, en la vía principal, vías secundarias, apartaderos, estaciones y anexidades férreas.”

No obstante lo anterior, posterior a dicha norma de carácter general, se establece una conducta especial dispuesta de forma exclusiva para la carga y descarga de mercancías en vía pública, ésta es el artículo 78 de la Ley 769 de 2002, aún vigente, que señala a dicha actividad de descargue como un estacionamiento especial, frente al cual dispuso:

“Artículo 78. Zonas y horarios de estacionamiento especiales. Los conductores que estacionen sus vehículos en los lugares de comercio u obras de construcción de los perímetros urbanos con el objeto de cargar o descargar, deberán hacerlo en zonas y horarios determinados para tal fin.

Las entidades públicas o privadas y los propietarios de los locales comerciales no podrán hacer uso del espacio público frente a sus establecimientos para el estacionamiento exclusivo de sus vehículos o el de sus clientes.

Las autoridades de tránsito definirán las horas y zonas para el cargue o descargue de mercancías.”

Lo anterior demuestra que en efecto, a la actividad de carga y descarga de mercancías, NO LE ES POSIBLE aplicar la prohibición de parqueo que se dispone en la norma general (Art. 15 Ley 1383 de 2010), materializada en demarcaciones de zonas de prohibido parqueo.

La norma aplicable es el artículo 78 de la Ley 769 de 2002 que permite la carga y descarga de mercancías en vía pública, bajo la reglamentación de la autoridad municipal.

Al presentarse un conflicto como el planteado en éste proceso, debe aplicarse una ponderación entre el derecho colectivo al goce del espacio público, partiendo de la base de que aquel no es absoluto, sino que es flexible frente a otros intereses del mismo rango constitucional.

Así las cosas, prohibir de plano el ejercicio de una conducta necesaria para el ejercicio de derechos como la libertad económica y la libre iniciativa privada, no es una interpretación constitucionalmente válida, todos los intereses deben coexistir y para ello surgen las reglamentaciones.

El derecho al goce del espacio público NO ES ABSOLUTO, como se dijo, aquel en ciertas condiciones debe ceder para poder hacer efectivos otros intereses de importancia similar. El ejemplo más notable es el de cierre de vías para permitir el paso de manifestaciones, con lo cual se hace efectivo el derecho de protesta.

En ese mismo sentido se tiene la actividad de carga y descarga de mercancía en vía pública, aquella es necesaria para el tráfico de bienes y mantener el equilibrio económico, garantizando además el acceso de mercancías al consumidor final. Puede que tanto el cierre de vías para manifestaciones, como la ocupación temporal de vehículos de carga y descarga, generen alguna afectación para algunos ciudadanos, pero aquello NO ES UN DAÑO ANTIJURÍDICO, pues es una carga social que se tiene el deber de soportar para hacer efectivos otros intereses sociales.

Es por ello que actividades de ésta índole son reguladas mas no prohibidas, generando una obligación de tolerancia para el ciudadano que puede verse

afectado, pues todo desembocará en la prevalencia del interés general. No se puede así, hacer prevalecer la molestia ciudadana (interés particular), para prohibir una conducta que beneficia a toda la sociedad, pues prevalece el interés general de toda una sociedad consumidora de bienes.

Así las cosas, es claro que la carga y descarga de mercancías NO es una actividad que genere violación a derecho colectivo alguno.

8. MODELO DE PROTECCIÓN AL ESPACIO PÚBLICO SIN AFECTACIÓN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE COMERCIANTES

8.1. PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

La libertad económica es núcleo esencial del Estado Social de Derecho, mediante aquella se protegen bienes jurídicos tutelados como la libre iniciativa privada, la propiedad y la libre escogencia de ocupación y oficio, todos dentro de los límites del bien común.

La Corte Constitucional, con base en el artículo 333 de la Constitución, reconoce dos tipos de libertades: la libertad de empresa y la libre competencia, las cuales desarrolla de la siguiente forma:

“La libertad de empresa es la facultad de las personas de “(...) afectar o destinar bienes de cualquier tipo (principalmente de capital) para la realización de actividades económicas para la producción e intercambio de bienes y servicios conforme a las pautas o modelos de organización típicas del mundo económico contemporáneo con vistas a la obtención de un beneficio o ganancia”. Esta libertad comprende, entre otras garantías, (i) la libertad contractual, es decir, la capacidad de celebrar los acuerdos que sean necesarios para el desarrollo de la actividad económica, y (ii) la libre iniciativa privada. La libre competencia, por su parte, consiste en la facultad que tienen todos los empresarios de orientar sus esfuerzos, factores empresariales y de producción a la conquista de un mercado, en un marco de igualdad de condiciones. Según la jurisprudencia constitucional, esta libertad comprende al menos tres prerrogativas: (i) la posibilidad de concurrir al mercado, (ii) la libertad de ofrecer las condiciones y ventajas comerciales que se estimen oportunas, y (iii) la posibilidad de

contratar con cualquier consumidor o usuario. En este orden de ideas, esta libertad también es una garantía para los consumidores, quienes en virtud de ella pueden contratar con quien ofrezca las mejores condiciones dentro del marco de la ley y se benefician de las ventajas de la pluralidad de oferentes en términos de precio y calidad de los bienes y servicios, entre otros. Para garantizar la libre competencia, el Estado es entonces responsable de eliminar las barreras de acceso al mercado y censurar las prácticas restrictivas de la competencia, como el abuso de la posición dominante o la creación de monopolios.”³

La libertad económica es así, un conjunto de facultades que se le otorga a los particulares, con el fin de que realicen las actividades económicas necesarias para satisfacer sus necesidades y la generación de riqueza, por tanto, es un deber de toda la sociedad respetarla, ejercerla de forma respetuoso y ser tolerante con cargas (no desproporcionadas) que aquella genere.

8.2. LÍMITES A LA LIBERTAD ECONÓMICA

El derecho a libre competencia fue establecido en el artículo 333 de la Constitución, en el que se dispone lo siguiente:

“Artículo 333. La libertad económica y la libre iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.

La libre competencia es un derecho de todos que supone responsabilidades. (...)”

³ Corte Constitucional. Sentencia C-197-12.

Las responsabilidades que implica el ejercicio de la libertad económica son precisamente sus límites, siendo necesaria entonces la intervención estatal para evitar su desbordamiento.

La limitación de las libertades económicas, así como la intervención del Estado en la economía, puede adoptar distintas modalidades; algunas de ellas fueron expuestas de la siguiente manera en la sentencia C-150 de 2003:

“Ahora bien, la intervención del Estado en la economía puede ser de diferente tipo, sin que siempre pueda efectuarse una diferenciación clara entre las formas de intervención correspondientes. Así, por ejemplo, en la doctrina[15] se habla de intervención estatal global[16], cuando versa sobre la economía como un todo, sectorial, cuando recae en una determinada área de actividad[17], o particular, si apunta a una cierta situación como por ejemplo a la de una empresa[18]; de intervención estatal directa, cuando recae sobre la existencia o la actividad de los agentes económicos, o indirecta, cuando está orientada no a la actividad económica propiamente dicha sino al resultado de la misma; intervención unilateral, cuando el Estado autoriza, prohíbe o reglamenta una actividad económica, o intervención convencional, cuando el Estado pacta con los agentes económicos las políticas o programas que propenden por el interés general; intervención por vía directiva, cuando el Estado adopta medidas que orientan a los agentes económicos privados, o intervención por vía de gestión, cuando el Estado se hace cargo el mismo de actividades económicas por medio de personas jurídicas generalmente públicas.

Por otra parte, de acuerdo con su función, la intervención del Estado en la economía también se puede agrupar en diferentes tipos. Algunos doctrinantes distinguen, entonces, tres clases de intervencionismo

económico: conformativa, que establece los requisitos de existencia, formalización y funcionamiento de los actores económicos; finalística, que señala los objetivos generales o las metas concretas a los cuales han de propender los actores económicos; y condicionante, que propiamente fija las reglas de juego del mercado o de un sector económico.

Adicionalmente, según su contenido, los actos de intervención estatal pueden someter a los actores económicos a un régimen de declaración –un nivel bajo de intervención que sólo exige que los actores económicos presenten a las autoridades determinada información–, un régimen de reglamentación, mediante el cual se fijan condiciones para la realización de una actividad, un régimen de autorización previa, que impide el inicio de la actividad económica privada sin que medie un acto de la autoridad pública que lo permita, un régimen de interdicción, que prohíbe ciertas actividades económicas juzgadas indeseables, o un régimen de monopolio, mediante el cual el Estado excluye del mercado determinadas actividades económicas, y se reserva para sí su desarrollo sea de manera directa o indirecta según lo que establezca la ley.”⁴

8.3. LÍMITES AL DERECHO COLECTIVO AL GOCE DE UN AMBIENTE SANO

La Corte, ha analizado la controversia que genera la recuperación del espacio público cuando este se encuentra ocupado por los ciudadanos con fundamento en diversos preceptos consagrados en la Constitución Política como pasa a explicarse a continuación. En la sentencia T-097 de 2011, se señalaron las siguientes disposiciones como aquellas que regulan el tema:

⁴ Corte Constitucional. Sentencia C-197-12.

-“El artículo 82 del Texto Fundamental establece que, “[e]s deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.”

-Así mismo, el artículo 315 de la Constitución Política relaciona entre las atribuciones del Alcalde, obedecer y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas y los acuerdos del concejo municipal. En virtud del: artículo 313 Superior, lo concerniente con el espacio público, es parte de los deberes que deben atender dichos funcionarios.

-Igualmente, el artículo 132 del Decreto 1355 de 1970, “por el cual se dictan normas sobre policía”, dispone: “Cuando se trate de la restitución de bienes de uso público, como vías públicas urbanas o rurales o zona para el paso de trenes, los alcaldes, una vez establecido, por los medios que estén a su alcance, el carácter de uso público de la zona o vía ocupada, procederán a dictar la correspondiente resolución de restitución que deberá cumplirse en un plazo no mayor de treinta días. Contra esta resolución procede recurso de reposición.”

-Además, el artículo 366 del mismo cuerpo normativo, consagra que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana son finalidades sociales del Estado, respecto de lo cual la Corte ha señalado: “La búsqueda de una mejor calidad de vida para las personas y la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, es uno de los fundamentos sobre los cuales se estructura el concepto de Estado Social de Derecho. Es por ello que, de conformidad con el artículo 82 de la Constitución Política, la

integridad del espacio público y su destinación al uso común, son conceptos cuya protección se encuentran a cargo del Estado, precisamente por la necesidad de asegurar el acceso de todos los ciudadanos al goce y utilización común de tales espacios colectivos.”⁵

Bajo este contexto, la Corte Constitucional indicó que las conductas orientadas a proteger el espacio público tienen el carácter de legítimas y la función de regular su uso corresponde a una verdadera necesidad colectiva lo que implica que sea un deber con preeminente atención. De ésta forma, afirma la Corte en la citada sentencia, que la protección del espacio público debe conciliar los diversos ámbitos o categorías sociales que se puedan encontrar inmersos en un lugar común, sin desconocer, en todo caso, el principio constitucional consagrado en el artículo 1° Superior, mediante el cual se garantiza la prevalencia del interés general frente a los intereses privados, en beneficio de la colectividad.

En esta medida, la Corte ha señalado, de manera enfática, que:

“(…) a los particulares no le es posible exigir el reconocimiento de derechos sobre el espacio público, como quiera que “se trata de un bien inalienable, imprescriptible e inembargable”[5], cuya característica definitoria se refleja en la imposibilidad de que las personas pretendan ingresar a su patrimonio derechos reales sobre este.

No obstante lo anterior, esta Corporación a través de su jurisprudencia, ha advertido que emerge en esta problemática una tensión que se genera por un lado, en el deber de las autoridades

⁵ Sentencia T-097 de 2011.

estatales de proteger la integridad del espacio público cuya destinación es el uso común y prevalece frente al interés particular y, por el otro, en la concreción del derecho constitucional al trabajo de las personas que como consecuencia de su estado de marginalidad y exclusión del mercado laboral tienen como única opción para satisfacer sus necesidades básicas dedicarse a actividades comerciales informales, que desarrollan en aquel.

En ese orden de ideas, sin llegar a desconocerse que el interés general de preservar el espacio público debe prevalecer sobre el interés particular de los vendedores ambulantes y estacionarios, resulta necesario, según la jurisprudencia constitucional, conciliar en forma proporcional y armoniosa los derechos y deberes en controversia. De ahí que, está permitido constitucionalmente, el desalojo de los vendedores informales del espacio público, siempre y cuando: (i) previo al desalojo, exista un proceso judicial o policivo que lo autorice, con la plena observancia de las reglas del debido proceso y (ii) se implementen políticas públicas que garanticen su reubicación. Así, “corresponde a las autoridades administrativas velar por el cumplimiento de las reglas relativas a ese debido proceso, respecto de las diligencias de desalojo, con políticas que garanticen que los ocupantes no queden desamparados.”

En esta medida, para la Corte el ejercicio de las potestades administrativas dirigidas a recuperar el espacio público, debe guardar armonía y cumplir los demás mandatos constitucionales, especialmente, el respeto por los derechos fundamentales de quienes puedan resultar perjudicados por esas actuaciones.

Por consiguiente, los planes o políticas de recuperación del espacio público que ejecuten las autoridades, que implique limitación de derechos para las personas

que realizan actividades informales en el mismo, deben contemplar medidas alternativas que las protejan a fin de hacer menos traumática la aplicación de tales programas.

Para lograr dicho cometido, esta Corporación, en Sentencia T-773 de 2007, señaló que al momento de diseñar y ejecutar las políticas, programas y medidas de recuperación del espacio público, las autoridades competentes tienen el deber constitucional de estudiar la situación de los ocupantes del espacio público con toda la diligencia, prolijidad y sensibilidad social que esta requiere, haciendo énfasis en la incorporación de variables socioeconómicas reales dentro del proceso de formulación y ejecución señalado, con el propósito de evitar el acaecimiento de efectos contrarios al goce efectivo de los derechos fundamentales. Lo que se debe propender, en definitiva, es garantizar estos derechos, a través de decisiones complementarias que hagan parte integrante de la política, programa o medida buscada.

Si lo anterior no es posible, concluye la sentencia en comento, “el adelantamiento de la política, programa o medida resultará, por su propia naturaleza y por sus efectos, contrario al orden constitucional y en especial al goce efectivo de los derechos fundamentales (art. 2, C.P.), incluso si se ampara formalmente en el cumplimiento de un determinado cometido estatal, como el de preservar el espacio público.”

En ese orden de ideas, este Tribunal, ha señalado que es deber del juez constitucional analizar en cada caso concreto si las actuaciones adelantadas por la Administración con el fin de recuperar el espacio público, han sido razonables, en cuanto han protegido los derechos fundamentales de las personas sobre las que se generó una expectativa favorable relacionada con la ocupación de una zona catalogada de uso público.

8.4. PONDERACIÓN COMO SOLUCIÓN AL CONFLICTO JURÍDICO

Se presenta un fenómeno de concurrencia o coexistencia de derechos, por un lado, el derecho constitucional al goce del espacio público y, por el otro, el derecho a la libertad económica, materializado en el transporte, cargas y descarga de mercancías. Cuando estos dos derechos entran en conflicto y es posible su armonización, el juez debe proceder a realizar un juicio de ponderación. El propósito de la ponderación no es excluir o eliminar el derecho a la libertad económica, sino establecer una prelación a favor del goce del espacio público que se debe ver excepcionalmente afectado, no de forma desproporcionada, por la actividad económica.

Para éste ejercicio jurídico, deben traerse a colación los principios de razonabilidad y proporcionalidad que desarrolla la Corte Constitucional así:

“La teoría jurídica alemana, partiendo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal, ha mostrado cómo el concepto de razonabilidad puede ser aplicado satisfactoriamente sólo si se concreta en otro más específico, el de proporcionalidad. El concepto de proporcionalidad sirve como punto de apoyo de la ponderación entre principios constitucionales: cuando dos principios entran en colisión, porque la aplicación de uno implica la reducción del campo de aplicación de otro, corresponde al juez constitucional determinar si esa reducción es proporcionada, a la luz de la importancia del principio afectado.

El concepto de proporcionalidad comprende tres conceptos parciales: la adecuación de los medios escogidos para la consecución del fin perseguido, la necesidad de la utilización de esos medios para el logro del fin (esto es, que no exista otro medio que pueda conducir al

fin y que sacrifique en menor medida los principios constitucionales afectados por el uso de esos medios), y la proporcionalidad en sentido estricto entre medios y fin, es decir, que el principio satisfecho por el logro de este fin no sacrifique principios constitucionalmente más importantes.”⁶

En la práctica se establece que la prelación al goce del espacio público indica que en efecto las vías públicas no pueden estar afectadas por la constante presencia de vehículos en la vía pública, pues ello afecta además la movilidad y el tránsito de peatones, por ello, lo que cede es el ejercicio de la actividad económica, la cual, sin entenderse prohibida, sí debe comprenderse como regulada y limitada por el bien común.

Así las cosas, la demarcación de las zonas comerciales para los establecimientos de grandes comercios, es determinante para la solución práctica del conflicto.

Por otra parte, se hace necesaria la limitación irrestricta al ejercicio de ésta actividad necesaria para el comercio, en zonas rurales o no demarcadas como comerciales.

De igual forma, es importante que las autoridades locales tengan control sobre el uso de suelo que se otorga para el establecimiento de locales comerciales que requieran una actividad constante de cargue y descargue de mercancías, exigiendo al empresario la disposición de tales espacios dentro de estacionamientos de sus predios, con lo cual no se haga necesaria la ocupación del espacio público.

Finalmente, es necesario continuar con la restricción de la actividad de forma horaria, establecimiento como horarios los de menor circulación y días de poca

⁶ Sentencia No. C-022/96.

congestión vial. De ésta forma se aplicaría la ponderación en el ámbito práctico sin afectar la actividad económica y dando protección al espacio público.

.

9. CONCLUSIONES

El espacio público y los bienes que lo conforman, por su incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos, cuentan con una especial protección dentro de nuestro ordenamiento jurídico haciéndolos “inalienables, imprescriptibles e inembargables” y consagrando un deber en cabeza del Estado, de rango constitucional, de preservar su integridad y su destinación al uso y goce de la colectividad.

La carga y descarga de mercancías es una actividad lícita, permitida por el legislador y regulada por cada autoridad administrativa municipal o distrital. Coexiste con el derecho colectivo al espacio público, pues es necesaria para hacer efectivos otros derechos del mismo rango constitucional, como la libertad económica y los derechos de los consumidores, los cuales a su vez constituyen la columna del sistema económico libre del Estado Social de Derecho.

La actividad de carga y descarga de mercancía en vía pública, es necesaria para el tráfico de bienes y mantener el equilibrio económico, garantizando además el acceso de mercancías al consumidor final. Puede que tanto el cierre de vías para manifestaciones, como la ocupación temporal de vehículos de carga y descarga, generen alguna afectación para algunos ciudadanos, pero aquello no es un daño antijurídico, pues es una carga social que se tiene el deber de soportar para hacer efectivos otros intereses sociales.

La libertad económica es así, un conjunto de facultades que se le otorga a los particulares, con el fin de que realicen las actividades económicas necesarias para satisfacer sus necesidades y la generación de riqueza, por tanto, es un deber de toda la sociedad respetarla, ejercerla de forma respetuoso y ser tolerante con cargas (no desproporcionadas) que aquella genere.

10. BIBLIOGRAFIA

Alcaldía Mayor de Bogotá. Decreto Nacional 1504 de 1998.

Corte Constitucional. Sentencia T-578A/11.

Corte Constitucional. Sentencia C-197-12.

Corte Constitucional. Sentencia C-022-96.

Corte Constitucional. Sentencia T-097 de 2011.

DÍAZ Pablo. Teoría Keynesiana. Zona económica 2014. Disponible en:
<http://www.zonaeconomica.com/teoria-keynesiana>.

Enciclopedia Jurídica. La sociedad de consumo y la protección de los consumidores. Disponible en <http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/consumidores-proteccion-de-los/consumidores-proteccion-de-los.htm>

Federación Nacional de Estudiantes de Economía. Disponible en http://www.fenadeco.org/pag_files/ESCUELA_CLASICA.pdf

Isolina. Defensa Del Consumidor Y Responsabilidad Civil de las Personas Jurídicas. Revista Electrónica Del Trabajador Judicial.

LLOBET I Aguado. “El deber de información en la formación de los contratos”. Madrid

MAYOR Juan Camilo. Escuela Clásica. Escuela Colombiana de Ingeniería.

MÉNDEZ José. Fundamentos De Economía. Editorial McGraw-Hill. 1990.

RUBIO Jairo. Derecho de los mercados – Propiedad industrial – Competencia – Protección al Consumidor. Editorial Legis. 2007.